

MEXICO: UNA ECONOMIA ENDEBLE

David Ibarra
6 de junio de 2012

Pese a costosos ensayos, la economía mexicana se debilita al situarse sin solución clara de continuidad a mitad de camino entre dos patrones disímiles de desarrollo y dentro de una crisis no resuelta del orden económico internacional. Sin duda, sobrevendrán cambios profundos de carácter global e interno, situación que afectará a toda la organización social, a la distribución del poder económico y del político. No se trata de las oscilaciones económicas ordinarias, ni podrían paliarse con alteraciones menores de los instrumentos públicos de acción. La tarea cubre mucho más terreno, abarca desde la reconstrucción de las instituciones políticas y económicas, así como las de la seguridad colectiva hasta llevar la consolidación de un pacto social nuevo que no sólo equilibre con mediana equidad a las diversas fuerzas, sino que recupere la capacidad nacional de progresar y de imprimir rostro civilizado a ese proceso.

El modelo socioeconómico que se ha tratado de implantar en nuestro país, acota la participación y el debate sustantivos al empobrecer el poder decisorio de gobierno y sociedad. La renuncia al uso del viejo y nuevo instrumental desarrollista se acentúa con la globalización concebida como el proceso de instaurar un orden financiero y productivo supranacional, también más allá de las políticas nacionales. La desconfianza elitista propia y ajena en la democracia, en el gobierno de los hombres, se completa con nuestra fe reverencial en los mercados, como si éstos no fuesen también una imperfecta construcción humana. Por eso se ha recurrido a trasvasar responsabilidades a los mercados y a erigir a los medios masivos de comunicación privatizados en poder, capaz de informar pero también de ocultar, falsear o convertir en virtud, desequilibrios sociales y políticas inequitativas de ajuste económico.

En México, los resultados están a la vista. El ritmo de crecimiento se ha reducido a la mitad, hecho más volátil y menos sostenible de compararse los períodos 1945-1980 y 1980-2010. El descontento de jóvenes y viejos, va en ascenso. La vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la economía internacional queda evidenciada con la década perdida de

los ochenta o con las sucesivas crisis de 1987, de 1995, de 2001 y de 2008-2009. En el ámbito de la economía subsisten errores y desequilibrios que al retroalimentarse mantienen postrada a la producción y al empleo o producen recesos repetitivos. La principal falla de la política macroeconómica nacional reside en haber olvidado a lo largo de más de un cuarto de siglo las prioridades del empleo y del crecimiento, mediante el expediente de transferir tareas gubernamentales políticamente esenciales a los mercados, incluso en materia de asignación de recursos o de garantizar mínimos de protección social a la población. En efecto, las políticas públicas dejaron de asumir responsabilidad directa en la ocupación, en el reparto del crédito o incluso en la distribución del ingreso, dejando esas tareas al funcionamiento de mecanismos incuestionados y supuestamente eficientes del mercado.

Quizás se obtuvieron ventajas políticas al desviar a los mercados los reclamos de la sociedad derivados de los ineludibles costos del acomodo al orden económico neoliberal. En esa vertiente de manos libres, exculpadora de los desaguizados, las tareas públicas se han restringido medularmente a la adaptación de la economía nacional a la globalización, entre cuyas exigencias principales está la de preservar la estabilidad de precios aun a costa de aceptar crecimientos raquíuticos y desigualdades enormes.

En tales circunstancias, no es de extrañar que la evasión de lo político, haya gestado desequilibrios que tienen postrada a sociedad y economía mexicanas. Valga mencionar algunos casos conspicuos de carácter económico. Uno es de orden estructural, se caracteriza por un proceso incompleto de modernización y adaptación de la planta productiva y del sector financiero vernáculos al libre comercio. Aquí destacan cuestiones desatendidas, la apertura de mercados resultó destructiva de los nexos interindustriales internos por instrumentarse sin programas de reconversión productiva, sin política industrial ni de fomento exportador y, sobre todo, mediante la copia extralógica de recetas foráneas que llevaron al desmantelamiento sin reemplazo de los viejos instrumentos de la acción gubernamental.

El segundo desequilibrio es financiero: ante la indiferencia de las autoridades, la banca casi ha abandonado el crédito a la producción y a la formación de capital. El Banco

de México cuida de la estabilidad de precios, pero descuida el crecimiento de la economía, así como la regulación apropiada de la banca extranjera o nacional. A la par, la política fiscal quedó empequeñecida, cuando se desgravó sustantivamente el Impuesto sobre la Renta y se suprimieron los gravámenes al comercio exterior, hasta dejar como única salida la expoliación de las finanzas de PEMEX en ausencia de una reforma tributaria siempre pospuesta y frente a la Ley de Responsabilidad Hacendaria que obliga al equilibrio presupuestal casi en cualquier circunstancia.

El tercer desajuste es de orden social consiste en el resquebrajamiento del mercado de trabajo, en hacer crónica la desigualdad distributiva y en la aglomeración de perdedores en la justa de la competencia. El último desequilibrio se expresa en la segmentación de las fuerzas políticas, nacida de razones ideológicas, pero sobre todo de la cerrada defensa de intereses y privilegios elitistas que impiden formar acuerdos democráticos sobre los grandes objetivos nacionales. Más de cincuenta millones de pobres, siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, diez millones de indocumentados mexicanos en los Estados Unidos, el costoso salvamento y extranjerización de la banca, reflejan incontrovertiblemente fallas severas de nuestro régimen democrático que impide dar voz y peso político a grandes segmentos de la población, acaso ya mayoritarios.

Las contradicciones se multiplican lo mismo a escala económica que social. Desde tiempo atrás, la tasa de crecimiento del ingreso por habitante decayó arrastrando consigo a la demanda de trabajo del sector moderno de la economía; a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, la apreciación deliberada del peso, contrarió y contraría la dirección básica de la estrategia de desarrollo hacia afuera al castigar exportadores y productores internos y crear vulnerabilidades externas; a mayor abundamiento, la deliberada, injustificada, renuncia al impulso desarrollista estatal

impide, hoy, la instrumentación de una eficaz política contracíclica en una crisis global, cuyos efectos no se acaban de disipar.

Como es natural, el costo principal de la estrategia adoptada consistió en crear debilidades y vulnerabilidades sin cuento. Visto más de cerca, en 1995 el producto cayó más del 6% y, otro tanto, ocurre en 2009. Por supuesto, el consumo privado y la inversión se contrajeron todavía más, arrastrando consigo al bienestar ciudadano. Los pocos signos económicos alentadores se refieren a logros estabilizadores: la inflación anual baja al 27%-28% en los ochentas, a 4%-5% en la actualidad; al propio tiempo, el tipo de cambio se mantiene alrededor de 12-14 pesos por dólar, el déficit público entre el 1% y el 3% del producto y las tasas pasivas de interés (CETES a 28 días) en poco más del 4%.

Por lo que hace a las perspectivas de 2012, los pronósticos oficiales y privados adelantan un crecimiento decreciente del producto (2.5%-3.5%) al alcanzado en los dos ejercicios anteriores (5% y 4%); la inflación anual oscilará entre el 3% y el 4%; el tipo de cambio se deslizará hacia los 14 pesos por dólar, pese a los persistentes esfuerzos revaloratorios; el déficit público entre 2.2% y 3.2% del producto: la cuenta corriente registrará un déficit de unos 15-17 mil millones de dólares.

La incierta mejoría macroeconómica postcrisis no es general y menos suficiente, con dificultades compensa la caída de 2009 sobre todo en el empleo, cuando ya se perfila una nueva pérdida de dinamismo económico; el consumo y el empleo del grueso de la población seguirán deprimidos y por tanto las ramas productivas más afectadas son las que se asocian a la demanda popular y a la inversión, esto es, a la salud intrínseca de los mercados nacionales.

En suma, junto a la incurable dependencia externa, el énfasis en soluciones de mercado, en la estabilidad de precios, en políticas fiscales y monetarias en extremo conservadoras, seguirán produciendo ritmos mediocres de crecimiento, costos ascendentes de sostenibilidad ambiental, mientras que el desempleo abierto, el ascenso de la informalidad y de la desocupación de los jóvenes alcanzan cifras peligrosamente altas.

De ahí el desprestigio de los viejos partidos políticos y el descontento manifiesto, ascendente, de la población joven con un futuro deteriorado.

En el ámbito de las relaciones económicas con el exterior, sufrimos la desindustrialización asociada sin paliativos a la apertura externa de los mercados nacionales y el haber centrado el esfuerzo exportador en la maquila de bajo valor agregado y poco dinamismo. Ello hace que las importaciones se disparen tan pronto como la economía comienza a crecer, acotando los ritmos asequibles de desarrollo con déficit manejable de las cuentas externas.

A lo anterior, se agrega el hecho de que los países motores de la globalización han comenzado a fallar. Los Estados Unidos y Europa no encuentran solución duradera a la depresión económica, arrastrando por reflejo, a la baja –ojalá no sea excesiva-, la expansión de las economías emergentes, como China o la India. Las políticas del Primer Mundo se enderezan primordialmente a la reconstrucción y defensa de las instituciones financieras, en tanto constituye su sector económico dominante, cuya vigencia y poder han quedado maltrechos por la crisis. Los desequilibrios fiscales y el alto endeudamiento de los países industrializados, nació del enorme gasto público asociado a los salvamentos de los bancos. Deuda y quiebras privadas se transformaron en deuda y desajustes de las cuentas públicas que ahora se quieren trasvasar a los ciudadanos por las más diversas vías: alzas de impuestos, reducción de salarios, menores prestaciones sociales, inversión pública disminuida y desempleo masivo.

La consolidación fiscal predicada en las naciones industrializadas, acaso asegure los privilegios de las elites financieras, pero inevitablemente prolongará el malestar de la población mundial. En efecto, la interdependencia global hace que las acciones de países individuales -sobre todo de los grandes- encaminadas a ganar la delantera en el saneamiento doble de sus presupuestos públicos y de sus instituciones financieras -sin recuperación económica todavía afianzada-, se reflejarán en costos o pérdidas de otras

naciones, en profundizar y prolongar la caída de la demanda conjunta. Esa es parte medular de la crisis del euro por cuanto una fracción decisiva del comercio exterior de los países miembros -sobre todo de los periféricos- proviene del intercambio intraeuropeo. En ausencia de coordinación multinacional de políticas, se arriesga a caer en una espiral económica descendente de alcance universal. Dicho de otra manera, en tanto persista el desorden del Primer Mundo, habrá que poner menos esperanzas en la recuperación de los mercados internacionales, en la aportación de un ahorro externo en extremo volátil y en la eficacia futura de la estrategia de crecimiento hacia afuera.

Otra rémora interna a resolver se sitúa en la incapacidad de la política monetaria y bancaria para cumplir funciones indispensables de intermediación financiera en favor de los productores nacionales, de la formación de capital y de la protección frente a flujos especulativos foráneos. En efecto, la cartera conjunta de la banca comercial y la de desarrollo ha caído del 63% al 21% del producto entre 1995 y 2008, uno de los más bajos coeficientes de financiación bancaria del mundo. La banca comercial ha disminuido en 33% su cartera real de crédito, particularmente al sector privado a pesar del respaldo de las garantías y redescuentos que le otorgan los bancos estatales. Por su parte, la transformación de la Banca de Desarrollo en banca de segundo piso, la orilló a renunciar a dos de las funciones centrales: el crédito directo, competitivo, al sector privado y la preparación de los grandes programas o proyectos nacionales de inversión. Por último, la acumulación antiinflacionaria y quizás antidesarrollista de reservas de divisas tiene un alto costo financiero que ya erosiona casi por entero el capital social del Banco de México.

La reprivatización-extranjerización de la banca comercial y la pérdida de iniciativa de la banca de desarrollo son causa de la ruptura de muchos de los nexos positivos entre economía, financiamiento a la producción y capacidades estatales de respaldar el desarrollo. Asimismo, la política monetaria, constreñida a manejar las tasas pasivas de corto plazo, poco influye en abatir los altísimos intereses que cubren los

empresarios cuando obtienen préstamos, restándoles artificiosamente competitividad. Aquí, y no en los salarios o en el costo de la protección laboral, debe encontrarse la falla en revertir el desplazamiento innecesario de la oferta nacional frente a la concurrencia de los productores del exterior. A su vez, la carencia de directrices y regulaciones permite que la banca comercial concentre principalísimamente sus actividades en el crédito al consumo con leoninas tasas de interés, preste sin riesgo al gobierno o a la nómina y transfiera el grueso de sus utilidades al exterior en demérito de su modernización interna.

Visto el problema del lado del empleo, la situación es alarmante. La población económicamente activa creció 140% entre 1980 y 2008, esto es, a una tasa media anual mayor al 3%. En contraste, el empleo en el sector secundario que podría tomarse como el segmento moderno de la economía de mercado, vio declinar su participación dentro de la población activa en casi 60% entre 1990 y 2008, con evidente desperdicio del llamado bono demográfico.

Según el INEGI en 2009, la población trabajadora informal y agrícola (26.1%) excedía al número de trabajadores formales (18.4%) como proporción de la población económicamente activa. Conforme a cálculos distintos (OIT y otros) la informalidad sumada a los trabajadores de bajísima productividad se acerca al 60% de la fuerza laboral. Las coberturas sociales se empobrecen, el empleo se precariza, las remuneraciones bajan, las jornadas parciales se multiplican, mientras se comprime el número de los puestos mejor remunerados. Y, sin embargo, el énfasis en la reforma laboral sigue puesto en ganar flexibilidad en contratar y despedir, como si los hechos anotados no fuesen prueba de la extrema maleabilidad de los mercados nacionales de trabajo. Las cifras son todavía más desalentadoras si se toma en cuenta a los jóvenes. Ahí la tasa de desocupación abierta excede tres o más veces la media nacional. Como si no fuese bastante la concentración del ingreso se sitúa en una de las más altas del mundo, mientras el tamaño de las clases medias retrocede. De seguir las cosas así, México seguirá siendo un país pobre, poblado de viejos, mientras la informalidad alimentará con

cuadros juveniles a las actividades delictivas que forman el trasfondo de la inseguridad reinante.

Dejando a un lado avances en materia de inflación o del equilibrio presupuestal, cabría concluir que las cuestiones medulares a la salud, al crecimiento de la economía y a la protección social reciben atención secundaria en la confección de las políticas gubernamentales y aún en las acciones inducidas del sector privado. En rigor, las prelações debieran estar orientadas a crear mecanismos de formación de acuerdos políticos que lleven a reconstruir sin disfraces ni subterfugios el ámbito de las responsabilidades gubernamentales y el contenido de la estrategia macroeconómica; fomentar prioritariamente el empleo; propiciar la reconversión deliberada de la planta productiva nacional y la integración del sector exportador al resto de la economía; emprender la reforma fiscal; regular el funcionamiento de la banca comercial y de la banca de desarrollo; limitar el poder de los medios masivos de comunicación; establecer derechos sociales exigibles y universales –sobre todo en materia de salud- para cubrir a todos, a los trabajadores, a los grupos marginados o sin representación política, compensadores parciales de la marginación y de la alta concentración del ingreso y del poder político; mejorar al sistema educativo y de investigación básica; y, sobre todo, fijar metas económicas y sociales mejor equilibradas con las de la estabilización de precios.

El listado incompleto del párrafo anterior muestra el amplio campo a desbrozar con el propósito de recobrar, humanizar, el desarrollo nacional y asumir con mejor fortuna los riesgos internacionales, sobre todo inmersos en un proceso electoral que, en principio, podría abrir la puerta a un golpe inicial de timón en la orientación de las políticas públicas. El camino es largo, pero las posibilidades están abiertas, son conocidas y asequibles; las aprovechan varios países en desarrollo, como lo demuestran palmariamente los casos emblemáticos del sur y este asiáticos. Si se procede con firmeza y prudencia, aun en circunstancias muy distintas al pasado, nada impediría que

reaccediéramos de otra manera al dinamismo que caracterizó a la economía nacional entre 1940 y 1980. En caso contrario, las insuficiencias económicas arriesgarían transformarse en inseguridad social y desencanto democrático, en frustración de la población joven, media y vieja, como ya comienza a ocurrir.